continúan recibiendo generosamente a refugiados que llegan por tierra o por mar,

Tomando nota con profundo reconocimiento del valioso apoyo que muchos gobiernos prestan al Alto Comisionado en el desempeño de su labor humanitaria,

Tomando nota con satisfacción de los resultados positivos logrados por la Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en África, celebrada en Ginebra del 9 al 12 de julio de 1984²⁰³, como parte de un proceso constante destinado a fomentar el interés de la comunidad internacional en la situación de los refugiados en África y en prestar apoyo a esos refugiados,

Celebrando los progresos realizados por el Alto Comisionado en el mejoramiento de la gestión de su Oficina e instándole a que continúe realizando esfuerzos en esa dirección de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado,

Tomando nota de la decisión del Comité Ejecutivo en cuanto a la inclusión del árabe, el chino y el español entre los idiomas oficiales del Comité Ejecutivo²⁰⁴,

1. *Elogia* al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a su personal por la dedicación y eficacia con que siguen cumpliendo sus responsabilidades;

2. *Reafirma enérgicamente* el carácter fundamental de la función del Alto Comisionado de dar protección internacional y la necesidad de que los gobiernos sigan cooperando plenamente con su Oficina para facilitar el ejercicio eficaz de esa función, en particular mediante la adhesión a los instrumentos internacionales y regionales pertinentes relativos a los refugiados, y su plena aplicación, y mediante el cumplimiento escrupuloso de los principios de asilo y no devolución;

3. *Condena* todas las violaciones de los derechos y la seguridad de los refugiados y de las personas que buscan asilo, en particular las perpetradas mediante ataques militares o ataques armados contra campamentos y asentamientos de refugiados, así como otras formas de brutalidad y casos en que no se ha socorrido a personas que buscaban asilo y que se encontraban en peligro en el mar;

4. *Insta* a todos los Estados a que, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y otros órganos internacionales competentes, adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los refugiados y las personas que buscan asilo;

5. *Insta también* a todos los Estados a que apoyen al Alto Comisionado en el cumplimiento de su responsabilidad de encontrar soluciones duraderas para el problema de los refugiados y de las personas desplazadas de que se ocupa su Oficina, principalmente mediante la repatriación o el retorno voluntarios, incluida la ayuda para los repatriados según sus necesidades o, cuando proceda, mediante la integración en los países de asilo o el reasentamiento en terceros países;

6. *Expresa su profundo reconocimiento* por la valiosa ayuda material y humanitaria de muchos países de acogida, en particular de los países en desarrollo que, a pesar de las graves crisis económicas que atraviesan y de lo limitado de sus recursos, siguen admitiendo, temporal o definitivamente, a grandes números de refugiados y personas desplazadas de las que se ocupa la Oficina del Alto Comisionado, y, reafirmando el principio de la solidaridad internacional y la distribución internacional de la carga,

insta a la comunidad internacional a que ayude a los países de acogida para que éstos puedan hacer frente al problema suplementario que constituye para ellos la presencia de esos refugiados;

7. *Toma nota con satisfacción* de las iniciativas del Alto Comisionado para hacer extensivo el concepto de asistencia orientada hacia el desarrollo a los refugiados y los repatriados, cuando proceda, y le insta a que continúe llevando a cabo esos esfuerzos en cooperación con los gobiernos interesados y con el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones que se ocupan del desarrollo, incluidas las organizaciones no gubernamentales;

8. *Elogia* a todos los Estados que facilitan el logro de soluciones duraderas y contribuyen generosamente a los programas del Alto Comisionado;

9. *Toma nota con reconocimiento* del apoyo constante que los organismos del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales prestan al Alto Comisionado en el desempeño de su labor humanitaria y pide al Alto Comisionado que continúe coordinando sus esfuerzos con dichos organismos y organizaciones;

10. *Exhorta* a todos los Estados a que promuevan soluciones duraderas y a que contribuyan generosamente a los programas humanitarios del Alto Comisionado para ayudar a las personas de que se ocupa el Alto Comisionado animados de un espíritu de solidaridad internacional y de distribución internacional de la carga.

101a. sesión plenaria
14 de diciembre de 1984

39/141. Proyecto de Convención contra el tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y actividades conexas

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 33/168 de 20 de diciembre de 1978, 35/195 de 15 de diciembre de 1980, 36/132 de 14 de diciembre de 1981, 36/168 de 16 de diciembre de 1981, 37/168 de 17 de diciembre de 1982, 37/198 de 18 de diciembre de 1982, 38/93 y 38/122 de 16 de diciembre de 1983 y demás disposiciones pertinentes,

Consciente de los peligros que entrañan la producción ilegal, la demanda y el tráfico ilícitos y el uso indebido de drogas y de la necesidad de prestar renovada atención a esta cuestión y a sus perniciosos efectos,

Preocupada por las crecientes incidencias negativas del tráfico ilícito de drogas sobre la salud pública y el desarrollo económico y social de los pueblos que lesionan particularmente a la juventud,

Teniendo presentes la Declaración de Quito contra el narcotráfico de 11 de agosto de 1984²⁰⁵ y la Declaración de Nueva York contra el tráfico y uso ilícito de drogas de 1° de octubre de 1984²⁰⁶, en que se expresa profunda alarma ante la gravedad del problema,

Reconociendo la valiosa contribución que aportan los instrumentos jurídicos internacionales existentes en sus áreas especializadas, entre otros, la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes²⁰⁷ y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971²⁰⁸,

²⁰³ Véase A/39/402 y Add.1 y 2.

²⁰⁴ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 12A (A/39/12/Add.1), párr. 185.

²⁰⁵ A/39/407, anexo.

²⁰⁶ A/39/551 y Corr.1 y 2.

²⁰⁷ Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.77.XI.3, pág. 13.

²⁰⁸ Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.78.XI.3, pág. 7.

Convencida de que la magnitud alcanzada por el narcotráfico y sus consecuencias hacen necesario elaborar una convención que contemple en conjunto los aspectos del problema y, en particular, los no previstos en los instrumentos internacionales existentes,

Encomiando la importante labor de la Comisión de Estupefacientes, del Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas y de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,

1. *Reitera* que la lucha contra la producción y la demanda ilegales y el consumo y el tráfico ilícitos de drogas merece tratamiento urgente y de máxima prioridad;

2. *Pide* al Consejo Económico y Social que, teniendo en consideración el párrafo 3 del Artículo 62, y el párrafo 1 del Artículo 66 de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 9 (I) de 16 de febrero de 1946 del Consejo, solicite a la Comisión de Estupefacientes que, en su 31º período de sesiones que ha de celebrarse en febrero de 1985, comience con carácter prioritario la elaboración de un proyecto de convención contra el narcotráfico que contemple en conjunto los aspectos del problema y, en particular, los no previstos en los instrumentos internacionales existentes y que, a tal fin, remita a la Comisión el proyecto de Convención que figura como anexo a la presente resolución como documento de trabajo;

3. *Pide* al Secretario General que proponga a la Comisión de Estupefacientes que modifique el programa de su 31º período de sesiones aprobado por el Consejo Económico y Social en su decisión 1983/115 de 24 de mayo de 1983, a fin de que la Comisión comience la elaboración del proyecto de convención a que se refiere el párrafo 2 *supra*;

4. *Pide* a la Comisión de Estupefacientes que informe al Consejo Económico y Social, de ser posible en su primer período ordinario de sesiones de 1985, sobre los resultados alcanzados al respecto;

5. *Pide* al Secretario General que informe a la Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución.

101a. sesión plenaria
14 de diciembre de 1984

ANEXO

Proyecto de Convención contra el tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas y actividades conexas

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Preocupados porque el tráfico y el consumo ilícitos de sustancias estupefacientes y sicotrópicas rebasan el campo de la salud física y moral de la humanidad para atentar contra la identidad e integración de los pueblos, puesto que constituyen un factor de dependencia y corrupción que lesiona sus valores espirituales, culturales, sociales y económicos, y *conscientes* de que esos problemas deben ser abordados dentro del marco de la cooperación internacional y de la geopolítica mundial, ya que las drogas son mercancías que se utilizan para vulnerar las economías lícitas de los pueblos y menoscabar sus soberanías y que en los países del área andina, especialmente, esas conductas dificultan el desarrollo, *acuerdan* calificar, dentro del derecho internacional, al tráfico ilícito, agente fundamental de la promoción del consumo ilícito de esas sustancias, que está causando graves daños en la juventud de los pueblos, como delito grave contra la humanidad, con base en los siguientes considerandos:

1. Por cuanto el tráfico y el consumo ilícitos de esas sustancias son atentatorios contra la integridad e identidad de nuestros pueblos porque lesionan sus valores espirituales, históricos y sociales y, a raíz de los avances de la tecnología en los medios de comunicación, la expansión inusitada de transculturización desviada, el incremento de la delincuencia organizada y otros factores, han rebasado los límites de las demandas y acciones aisladas de los Estados,

2. Por cuanto existe evidencia plena de que el tráfico ilícito está íntimamente vinculado a diseños y acciones dirigidos a subvertir el orden jurídico y la paz social en nuestros países a fin de afirmar sus innobles propósitos mercantilistas y constituye un factor de dependencia para los pueblos en desarrollo y dificulta la integración económica, de acuerdo con sus intereses comunes,

3. Por cuanto está claramente demostrado que el tráfico ilícito utiliza mecanismos de corrupción de las estructuras políticas y administrativas de los países productores y consumidores y atenta contra la seguridad y defensa de los pueblos enervando su capacidad bélica y afectando su soberanía,

4. Por cuanto se hace necesaria una actividad legislativa internacional que sea capaz de orientar una acción eficaz contra el tráfico y el consumo ilícitos, más allá de las fronteras nacionales, así como aplicar sanciones a los responsables, sea cual fuere el lugar donde se encuentran,

5. Por cuanto el volumen, la magnitud y la extensión del tráfico y el consumo ilícitos representan un reto a la sociedad universal y constituyen actividades lesivas a la existencia misma y la proyección futura del ser humano y afectan especialmente a la juventud, factor esencial del desarrollo de los pueblos,

6. Por cuanto la farmacodependencia es lesiva a la salud, uno de los bienes esenciales del ser humano y uno de los derechos inalienables, y sin salud individual no hay salud pública, circunstancia que, a la vez, incide y condiciona el desarrollo económico de los pueblos,

7. Teniendo en cuenta que el consumo reiterado de sustancias estupefacientes y sicotrópicas afecta al ser humano y que, por sus efectos biopsicosociales, lesiona su personalidad y ocasiona problemas a la familia, a la sociedad y al Estado,

8. Por cuanto el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas causa gravísimos daños de efectos frecuentemente irreversibles en la juventud, que es la parte más noble de los recursos humanos que integran los pueblos del mundo y debilita su capacidad de progreso cultural y material,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

DEFINICIONES

A los fines de la presente Convención se entiende por:

a) Tráfico: la preparación, producción, extracción, cultivo, preservación, adquisición, distribución, financiamiento, organización y dirección, transporte, suministro, almacenaje de cualesquiera de las sustancias o de sus materias primas a que se refiere la presente Convención, con las excepciones que, con fines médicos y científicos, se enumeraron en el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes²⁰⁷ y en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971²⁰⁸;

b) Estupefacientes y sustancias sicotrópicas: las sustancias, preparados y especialidades farmacéuticos incluidos en las listas anexas a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y aquellas otras que, de acuerdo con lo resuelto por la Organización Mundial de la Salud, puedan producir un estado de dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central o que tengan como resultado alucinaciones, trastornos de la función motora o del juicio, del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo o cuyo consumo pueda producir efectos análogos a los de una de las sustancias indicadas *supra*.

Artículo 2

NATURALEZA DEL DELITO

El tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas es un delito internacional grave contra la humanidad. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a prevenirlo y a reprimirlo.

Artículo 3

ACTIVIDADES ILICITAS

Se consideran actividades ilícitas las siguientes: el tráfico, distribución, suministro, fabricación, elaboración, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, cultivo, preservación, transporte, almacenaje, dirección, organización, financiamiento o facilitación del tráfico de cualesquiera de las sustancias o de sus materias primas a las cuales se refiere la presente Convención.

Artículo 4

CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE

Se considera circunstancia agravante que la persona responsable de tales actividades desempeñe funciones públicas de cualquier naturaleza.

Artículo 5

CARACTER DEL DELITO

A los efectos de la extradición, las actividades ilícitas enumeradas en la presente Convención no serán consideradas como delitos políticos.

Artículo 6

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS

1. Los delitos enumerados en la presente Convención son imprescriptibles. Sea cual fuere la fecha en que se hubiesen cometido serán objeto de investigación y las personas contra quienes existan indicios suficientes de la comisión de tales delitos serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, penadas.

2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivas legislaciones, las medidas legislativas o de otra índole que fueren necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por la ley o de otro modo, no se aplique a los delitos señalados en el artículo 3 y en el párrafo 2 de la parte A del artículo 10 de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida.

Artículo 7

DEBERES DE LOS ESTADOS PARTES

Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención y, especialmente, establecer sanciones penales rigurosas a las personas responsables de las actividades a las que se refiere la presente Convención.

Artículo 8

DEBERES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Todo Estado Parte u organismo internacional competente puede recurrir a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas, o de otras organizaciones regionales, a fin de que éstas tomen, conforme a los instrumentos internacionales que las rigen, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y represión de las actividades ilícitas enumeradas en la presente Convención.

Artículo 9

COOPERACION INTERNACIONAL

1. Los Estados Partes cooperarán bilateral y multilateralmente para prevenir y reprimir las actividades ilícitas enumeradas en la presente Convención y adoptarán todas las medidas necesarias para lograr esa finalidad.

2. A tal efecto:

a) Asegurarán en el plano nacional una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos. Para ello podrán designar un servicio apropiado que se encargue de dicha coordinación;

b) Se ayudarán mutuamente en la lucha contra el tráfico ilícito y colaborarán entre sí para la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores, cómplices o encubridores de esas actividades ilícitas, así como para el decomiso y destrucción de dichas sustancias;

c) Cooperarán estrechamente entre sí y con las organizaciones internacionales competentes de que sean miembros para mantener una lucha coordinada contra el tráfico ilícito, en particular en la recopilación de información y documentos relativos a la investigación a fin de facilitar el enjuiciamiento de las personas indicadas en el párrafo anterior, e intercambiarán tal información;

d) Velarán por que la cooperación internacional de los servicios apropiados se efectúe en forma expedita;

e) Cuidarán de que la transmisión de un país a otro de los autos para una acción judicial se efectúe en forma directa y expedita a los órganos designados por los Estados Partes. Este requisito no impide el ejercicio del derecho de un Estado Parte a exigir que se le envíen los autos por vía diplomática o de gobierno a gobierno;

f) Proporcionarán la información relativa a las actividades ilícitas sobre estupefacientes y sicotrópicos dentro de sus fronteras, incluidas las referencias al cultivo, producción, fabricación, tráfico y consumo de estas sustancias;

g) No adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra naturaleza que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hubieren contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y las sanciones de los culpables por la comisión de delitos señalados en la presente Convención.

Artículo 10

DISPOSICIONES PENALES

A

1. Cada uno de los delitos enumerados en la presente Convención, si se cometen por una sola persona o por varias actuando conjuntamente en diferentes países, se considerarán como delitos distintos.

2. La participación, la asociación o la confabulación, la instigación para cometer cualesquiera de esos delitos, así como la tentativa de cometerlos, y los actos preparatorios a los mismos se considerarán delitos.

3. Las sentencias condenatorias pronunciadas en el extranjero por esos delitos serán computadas para determinar la reincidencia.

4. Los referidos delitos cometidos tanto por nacionales como por extranjeros serán juzgados por el Estado Parte en cuyo territorio se haya cometido el delito, o por el Estado Parte en cuyo territorio se encuentra el delincuente, si no procede la extradición de conformidad con la ley del Estado Parte al cual se le solicita la extradición y si dicho delincuente no ha sido ya procesado y sentenciado por algún delito de los señalados en la presente Convención.

B

1. Cada uno de los delitos enumerados en el artículo 3 y en el párrafo 2 de la parte A del presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado o que se celebre entre los Estados Partes.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no tiene tratado, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente a los delitos enumerados en el artículo 3 y en el párrafo 2 de la parte A del presente artículo. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado Parte requerido.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enumerados en el artículo 3 y en el párrafo 2 de la parte A del presente artículo como casos de extradición entre ellos, sujetos a las condiciones exigidas por el derecho del Estado Parte requerido.

4. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará el principio de que los delitos a los cuales se refiere han de ser perseguidos y castigados de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte.

Artículo 11

TRIBUNALES COMPETENTES

Las personas implicadas en algunas de las actividades enumeradas en la presente Convención podrán ser juzgadas por el tribunal competente de cualesquiera de los Estados en cuyo territorio fue cometido el acto, o actos, a que se refiere la presente Convención, o ante el tribunal penal internacional que tenga jurisdicción de acuerdo con el ordenamiento legal respectivo.

Artículo 12

DEL FONDO DE AYUDA

Se crea un fondo destinado a suministrar ayuda a los países en desarrollo afectados por el tráfico ilícito de estupefacientes y sicotrópicos a fin de combatir y superar las causas creadoras de tales circunstancias y dotarlos de instrumentos idóneos de lucha contra tales actividades ilícitas. El fondo estará integrado por la contribución de los Estados Partes en la presente Convención con base a los mecanismos de cálculo aplicados en las Naciones Unidas, así como por contribuciones voluntarias.

Artículo 13

JUNTA ADMINISTRATIVA

El fondo será administrado por una Junta Administrativa integrada por un número igual de representantes por cada uno de los Estados Partes.

Artículo 14

FISCALIZACION

Los Estados Partes acuerdan encomendar a la Comisión de Estupefacientes y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas la función de fiscalización de las actividades y obligaciones señaladas en la presente Convención.

Artículo 15

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente Convención serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia, a petición de uno de los Estados Partes en la controversia.

Artículo 16

FIRMA O ADHESION

La presente Convención estará abierta sin límite de tiempo a la firma o adhesión de todos los Estados sean o no Miembros de las Naciones Unidas, estará sujeta a ratificación y los instrumentos respectivos serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

ENTRADA EN VIGENCIA

La presente Convención entrará en vigencia en el décimo día posterior a la fecha en que se realice el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 18

DURACION

La presente Convención tendrá una duración de cincuenta años, a partir de su entrada en vigor.

39/142. Declaración sobre la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas*La Asamblea General,*

Recordando sus resoluciones 33/168 de 20 de diciembre de 1978, 35/195 de 15 de diciembre de 1980, 36/132 de 14 de diciembre de 1981, 36/168 de 16 de diciembre de 1981, 37/168 de 17 de diciembre de 1982, 37/198 de 18 de diciembre de 1982, 38/93, 38/98 y 38/122 de 16 de diciembre de 1983 y demás disposiciones pertinentes,

Reconociendo la preocupación que prevalece en la comunidad internacional sobre el problema de la producción ilegal, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas,

Adopta la Declaración que figura en el anexo a la presente resolución.

*101a. sesión plenaria
14 de diciembre de 1984*

ANEXO

Declaración sobre la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas

La Asamblea General,

Teniendo presente que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas reafirman la dignidad y el valor de la persona humana, promueven el progreso social, procuran elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad y fomentan la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario,

Considerando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos²⁰⁹ los Estados Miembros también han asumido el compromiso de promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos,

Considerando que la comunidad internacional ha manifestado su grave preocupación por el hecho de que el narcotráfico y el uso indebido de drogas constituyen un obstáculo al bienestar físico y moral de los pueblos y en particular de la juventud,

Deseosa de intensificar la conciencia de la comunidad internacional acerca de la apremiante necesidad de prevenir y sancionar la demanda, el consumo, la producción y el tráfico ilícitos de drogas,

Considerando que la Declaración de Quito contra el narcotráfico de 11 de agosto de 1984²⁰⁵ y la Declaración de Nueva York contra el tráfico y uso ilícito de drogas de 1° de octubre de 1984²⁰⁶ reconocen la naturaleza internacional de este problema y destacan que debe ser solucionado con el apoyo decidido de toda la comunidad internacional,

Considerando que la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas han hecho valiosas contribucio-

nes para el control y la eliminación del narcotráfico y el uso indebido de drogas,

Reconociendo que los instrumentos internacionales existentes, entre otros, la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes²⁰⁷ y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971²⁰⁸, han creado un ordenamiento jurídico para la lucha contra el narcotráfico y el uso indebido de drogas en sus áreas especializadas,

Declara que:

1. El narcotráfico y el uso indebido de drogas son problemas de extrema gravedad que, por su magnitud y extensos efectos perniciosos, se han convertido en una actividad criminal internacional que exige atención urgente y máxima prioridad.

2. La producción ilegal, la demanda, el consumo y el tráfico ilícitos de drogas obstaculizan el progreso económico y social, constituyen una grave amenaza a la seguridad y el desarrollo de muchos países y pueblos y deben ser combatidos por todos los medios morales, legales e institucionales, a nivel nacional, regional e internacional.

3. La erradicación del narcotráfico es responsabilidad colectiva de todos los Estados, especialmente de aquellos afectados por problemas de producción, tráfico o consumo ilícitos.

4. Los Estados Miembros deben utilizar los instrumentos legales contra la producción, la demanda, el consumo y el tráfico ilícitos de drogas y adoptar las medidas adicionales necesarias para combatir las nuevas formas delictivas de este oprobioso y nefando crimen.

5. Los Estados Miembros se comprometen a intensificar esfuerzos y a coordinar estrategias orientadas hacia el control y la erradicación del problema complejo del narcotráfico y del uso indebido de drogas por medio de programas que incluyan alternativas económicas, sociales y culturales.

39/143. Campaña internacional contra el tráfico de drogas*La Asamblea General,*

Recordando sus resoluciones 35/195 de 15 de diciembre de 1980, 36/168 de 16 de diciembre de 1981, en la que adoptó la Estrategia internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas²¹⁰, 37/168 de 17 de diciembre de 1982, 37/198 de 18 de diciembre de 1982, 38/98 y 38/122 de 16 de diciembre de 1983, y demás disposiciones generales pertinentes,

Recordando también sus resoluciones 36/132 de 14 de diciembre de 1981 y 38/93 de 16 de diciembre de 1983, en que reconoció específicamente las limitaciones de carácter económico y técnico de muchos países en desarrollo para encarar la lucha contra la producción ilegal, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas,

Tomando nota de la preocupación expresada por el Secretario General en su memoria sobre la labor de la Organización²¹¹, en que reconoce la necesidad de efectuar mayores esfuerzos para reducir el tráfico y uso indebido de drogas,

Tomando nota de la Declaración de Quito contra el narcotráfico de 11 de agosto de 1984²¹² y la Declaración de Nueva York sobre el tráfico y uso ilícito de drogas de 1° de octubre de 1984²¹³, suscritas por varios países de América Latina, en que se consideraba el narcotráfico como un delito contra la humanidad y se pedía la puesta en marcha de una acción regional e internacional integral, eficaz y urgente que contase con los recursos necesarios para combatir el problema con éxito,

Considerando las actividades que realizan la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes,

Apreciando la acción que promueve el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas al asignar recursos financieros y apoyo a los progra-

²⁰⁹ Resolución 217 A (III).

²¹⁰ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1981, Suplemento No. 4 (E/1981/24), anexo II.

²¹¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo noveno período de sesiones, Suplemento No. 1 (A/39/1).

²¹² A/39/407, anexo.

²¹³ A/39/551 y Corr.1 y 2, anexo.